



► La ministra de Educación, María Paz Arzola, defiende el proyecto de Escuelas Protegidas en los colegios.

El primer test de Arzola con los liceos emblemáticos: gobierno enfrenta casi dos semanas de movilizaciones por Escuelas Protegidas

Al día siguiente de que la Cámara aprobara el proyecto del gobierno que entrega más atribuciones para aplicar medidas preventivas en colegios, comenzó una seguidilla de tomas y protestas en recintos educacionales. El flanco para la ministra de Educación está abierto, mientras el Ejecutivo sigue empujando su agenda legislativa.

Roberto Gálvez

El miércoles 22 de abril se puede marcar como el punto de partida de la seguidilla de tomas y movilizaciones que por estos días están protagonizando estudiantes secundarios de diversos liceos de Santiago, y que poco a poco se extienden a otras latitudes.

La fecha de inicio no es casualidad. El día anterior la Cámara aprobó el proyecto de ley del gobierno, llamado Escuelas Protegidas, que busca darles mayores atribuciones de prevención a los establecimientos educacionales y permitir, entre otras cosas, la revisión de mochilas. La iniciativa quedó a cargo del Ministerio de Educación que lidera la ministra María Paz Arzola, desde donde han defendido con ahínco dicha medida.

El proyecto no fue bien recibido por una cuota no menor de alumnos, y los primeros en demostrarlo fueron 200 de ellos en el Liceo de Aplicación ese 22 de abril, cuando se tomaron el establecimiento, lo que obligó a la suspensión de actividades. Aunque la mayoría terminó desistiendo, un grupo menor -alrededor de 10- se negó a deponer la toma, ante lo que el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro, sostenedor del liceo, solicitó a Carabineros el desalojo. Lo de ese miércoles sería el primer aviso.

La imagen se volvió a repetir al día siguiente, pero ahora en más recintos: además del mismo de Aplicación, en el Instituto Nacional y en el Liceo 1 Javiera Carrera estudiantes se tomaron sus colegios, acreando nuevamente suspensión de clases y desalojo en el caso del Liceo 1. Después de ese día, el SLEP propuso a los alumnos por primera vez una reunión con autoridades educativas, intentando aplacar la crecida de movilizaciones.

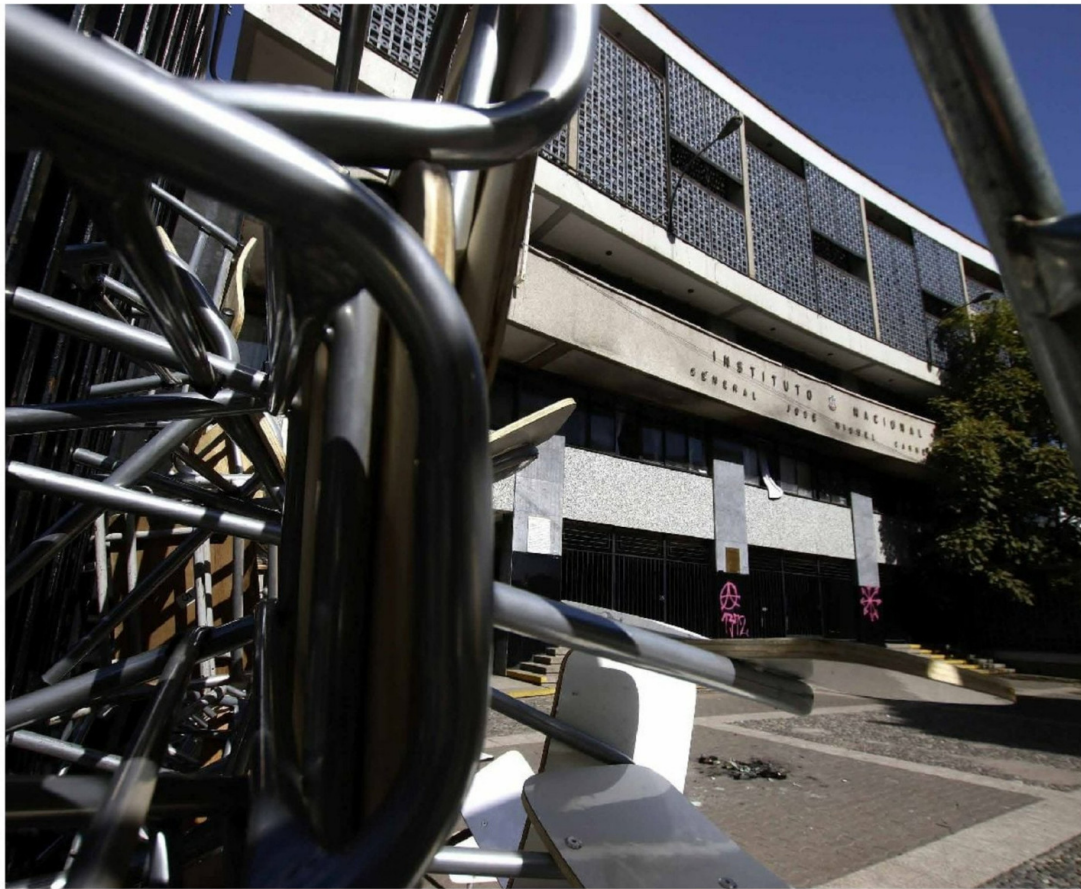
Un tema no menor en estos episodios es que desde el 1 de enero los 43 recintos de Santiago dejaron de ser resorte del municipio homónimo y pasaron a ser sostenidos por el SLEP, el que le reporta a la Dirección de Educación Pública (DEP), la que a su vez depende del Mineduc. Dicho en otras palabras, ahora la cartera, si bien no es sostenedor, tiene una relación mucho más directa con los recintos y las autoridades que los supervisan.

“No puedo estar conforme con lo que está sucediendo con las actuales autoridades del SLEP y las autoridades que están sobre ellas. Hemos tenido tomas que han durado días enteros y eso no corresponde. Aquí debería haber un trabajo claro, de advertencia a los estudiantes, que son una minoría los que están por la toma, que no se va a tolerar. Creo que ha habido ingenuidad tam-

SIGUE ►►



SIGUE ►►



bién, por no decir una actitud demasiado comprensiva, con los que están en toma”, dice al respecto el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien el año pasado tuvo un duro cruce con el Mineduc del exministro Nicolás Cataldo, a quien le criticó falta de proactividad en las movilizaciones de ese entonces, en un tono similar al de ahora.

El alcalde ejemplifica con el ida y vuelta de tomas y desalojos en el Aplicación. “Eso demuestra que la ingenuidad es finalmente causal de abuso por parte de estos grupos. Yo le exijo al SLEP y le exijo a la DEP, por los estudiantes de esta comuna que necesitan ir a estudiar, que mantengan el trabajo que se estaba haciendo. Este año la verdad es que ha habido un relajamiento, un retroceso enorme y me parece gravísimo. Yo responsabilizo de esto a las autoridades del SLEP y de la DEP, a lo menos”, plantea Desbordes.

El jefe comunal mira de reojo que el viernes 24 de abril el Javier Carrera volvió a ser tomado, con suspensión de clases, y que el lunes de la semana pasada todo siguió igual, con cuatro liceos tomados: el mismo Javier Carrera, además del Aplicación, Isaura Dinator y Barros Borgoño. Además hubo un grupo de estudiantes del Instituto Nacional que cortaron las calles. Ese día también se vieron daños en infraestructura y destrozos al interior del Aplicación.

Junto con eso, se concretó la reunión entre seis centros de estudiantes y autorida-

des de educación (seremi de Educación, asesores del Mineduc y SLEP) para iniciar una mesa de trabajo. Ahí los alumnos que llegaron entregaron un petitorio, el que tiene que ver con su disgusto por el proyecto Escuelas Protegidas.

Esa cita no fue suficiente para aplacar los ánimos. El martes 28 los liceos 1 Javiera Carrera, Barros Borgoño y el Confederación Suiza fueron tomados y se suspendieron las clases. En los tres casos se dio orden de desalojo. Asimismo, en el Instituto Nacional unos 20 encapuchados hicieron destrozos y agredieron a funcionarios, además de lanzar artefactos incendiarios, lo que derivó en la presentación de una querrela por parte del SLEP, que en paralelo comenzó a buscar alternativas con la seremi de Educación metropolitana para dar continuidad a los procesos pedagógicos. Las clases online fue una de las respuestas.

El miércoles, en tanto, tres liceos estuvieron en toma por los estudiantes: Instituto Nacional, Barros Borgoño y Javiera Carrera. En los tres casos se solicitó el desalojo.

La máxima responsable del SLEP como su directora ejecutiva, Paulina Retamales, dice que han buscado evitar las tomas, “favoreciendo espacios de conversación entre los equipos de los recintos y los estudiantes”.

Si la determinación igualmente termina siendo una toma, la indicación es mante-

► El martes, unos 20 encapuchados hicieron destrozos y agredieron a funcionarios en el Instituto Nacional.

ner el diálogo con los centros de estudiantes, con quienes se han logrado acuerdos. Las tomas, agrega, se las comunican a ella los equipos directivos, quienes deben mantener siempre presente a un representante y contacto con los alumnos. Esto, destaca, ha permitido que solo uno de los desalojos haya sido con estudiantes aún en toma. En los demás, cuando ha llegado la fuerza pública, ya no quedan alumnos.

Retamales ha estado en contacto permanente con la seremi y parte del equipo de la ministra Arzola. Según diversas fuentes, la instrucción desde el Mineduc ha apuntado a resguardar las clases, ver la forma de recuperarlas y que se informe a diario de la contingencia.

Consultado el Mineduc -por una versión sobre el rol que jugará en estas manifestaciones- qué se está haciendo para evitar que sigan creciendo y si Arzola o el subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, se involucrarán de alguna manera, hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

Estudiantes se organizan

El miércoles 28 lo que nació en Santiago traspasó esas fronteras, cuando liceos de

Providencia decidieron sumarse a una declaración conjunta de 10 de esas organizaciones: Javiera Carrera, Instituto Nacional, Isaura Dinator, Barros Borgoño, Carmela Carvajal, José Toribio Medina, Experimental Artístico, Confederación Suiza, Aplicación y Lastarria.

“Manifestamos mediante el presente escrito nuestra postura frente al proyecto de ley denominado Escuelas Protegidas, así como nuestra profunda preocupación ante las medidas de ajuste presupuestario que afectan al Ministerio de Educación”, dijeron. Y sumaron: “Reconocemos que las problemáticas de violencia en los espacios educativos son reales y requieren atención urgente. Sin embargo, consideramos que el enfoque del proyecto de ley resulta insuficiente y contraproducente”.

En este sentido, aseveraron que “existe una preocupación transversal en el estudiantado debido a que la iniciativa adopta un carácter punitivista que predomina, lo que no solo limita su efectividad, sino que puede profundizar las dinámicas de conflicto dentro de las comunidades educativas”.

Por otra parte, pusieron el acento en que la regulación de la vestimenta o la prohibición de interrupciones de clases “tensionan derechos fundamentales como la libertad de expresión, la identidad personal y el derecho a la organización y manifestación estudiantil”. También cuestionaron el carácter sancionatorio de impedir el acceso a la gratuidad.

“Como liceos organizados planteamos la necesidad de evaluar su eliminación (del proyecto) y avanzar hacia políticas públicas con un enfoque integral, formativo e inclusivo, que prioricen la salud mental, la mediación de conflictos, el acompañamiento psicosocial y la participación real del estudiantado”, añadieron.

En la parte final de la extensa declaración también manifestaron su preocupación por las medidas de ajuste fiscal: “Observamos una tensión entre estas políticas de ajuste y el principio de la educación como derecho social, desplazando el rol del Estado desde una lógica de garantía de derechos hacia una de administración restrictiva de recursos”.

Ese mismo miércoles se vio la primera marcha masiva en la capital, que tenía como objetivo entregar una carta al Mineduc y protestar contra las políticas educativas del gobierno. Algunas facultades de carreras universitarias también se sumaron. En Valparaíso se registró otra masiva marcha, donde cientos de estudiantes secundarios y universitarios se congregaron para manifestarse en una línea similar.

En tanto, el jueves pasado, el último día con clases antes del fin de semana largo, un amago de toma se vivió en el Instituto Nacional y el viernes, aunque en un contexto más amplio por el Día del Trabajador, distintas organizaciones estudiantiles se sumaron a las marchas convocadas para esa jornada. ●